

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

La suscrita Subdirectora de Gestión Ambiental (E) de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., con base en lo señalado en el Acuerdo N° 0015 del 13 de octubre de 2016, expedido por el Consejo Directivo de esta Entidad, en uso de las facultades legales conferidas por la Resolución N° 000531 de 2023 y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Constitución Nacional, el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 1437 de 2011 reformada por la Ley 2080 de 2021, Decreto 1076 de 2016, demás normas concordantes y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES SANCIONATORIOS

Que, mediante Resolución No. 000534 del 15 de julio de 2011, esta Corporación estableció el cumplimiento de unas obligaciones y se otorga una concesión de agua a favor de la Sociedad Alimentos Concentrados del Caribe S.A. – ACONDESA- propietaria de la Granja Porcicola Villa Clarita, ubicada en el municipio de Polonuevo-Atlántico.

Mediante Auto No. 00997 del 25 de febrero de 2013, la Corporación hizo unos requerimientos a la empresa ACONDESA, referidas al cumplimiento de unas obligaciones necesarias para la operación de la Granja.

Que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en cumplimiento de sus funciones de control, vigilancia y manejo de los recursos naturales del Departamento, y en consideración a las recomendaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señaladas en la Ley 99 de 1993, procedió a realizar visita de inspección técnica a las instalaciones de la Granja Porcicola Villa Clarita, originándose Informe Técnico No. 0001012 del 1 de noviembre de 2013, el cual concluyó:

- La administración de la Granja Porcicola Villa Clarita, no ha presentado las caracterizaciones de las aguas captadas de los pozos profundos.
- La administración de la Granja Porcicola Villa Clarita, no ha presentado los reportes de los volúmenes de agua captadas mensualmente para aplicar la tasa por uso con base en el caudal reportado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

- La administración de la Granja Porcicola Villa Clarita, no ha informado a la CRA sobre la disposición final de todo tipo de residuos generados durante la actividad de explotación de cría, levante de cerdo.
- En la construcción y puesta en marcha del proyecto no se ha intervenido ni afectado los recursos naturales renovables ni el ambiente.
- El manejo que se le está dando a los residuos generados en la explotación, es el adecuado.

Que, consecuentemente, esta Autoridad Ambiental, a través del Auto No. 000537 del 14 de agosto de 2014, inició una investigación a la empresa ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- (Granja porcícola Villa Clarita), identificada con Nit 890.103.400-5.

Que la anterior Resolución fue notificada personalmente el día 29 de agosto de 2014.

Que, esta Corporación consideró que los hallazgos encontrados en el Informe Técnico No. 0001012 del 1 de noviembre de 2013, y de la posterior revisión del expediente No. 1201-125, referente al cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta autoridad ambiental, se tiene elementos suficientes para proseguir con la investigación iniciada contra la empresa, respecto al manejo de la Granja Porcina Villa Clarita, por lo que mediante **Auto 0001516 DEL 3 DE OCTUBE DE 2018**, esta Autoridad Ambiental, formuló en contra de la sociedad Alimentos Concentrados del Caribe S.A. – ACONDESA-, ubicado en el municipio de Polonuevo, el siguiente pliego de cargos:

***"CARGO PRIMERO:** Presunto incumplimiento de las disposiciones contempladas en el Auto No. 0097 del 25 de febrero de 2013, expedido por esta autoridad ambiental, en el cual se establecen el cumplimiento de unas obligaciones, entre esas: Presentar las caracterizaciones de las aguas captadas de los pozos profundos, así como también,, los reportes de los volúmenes de agua captadas mensualmente para aplicar la tasa por uso, con base en el caudal reportado.*

***CARGO SEGUNDO:** Presunto incumplimiento de las disposiciones contempladas en el Auto No. 0097 del 25 de febrero de 2013, expedido por esta autoridad ambiental, respecto a las disposición final de todo tipo de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

residuos generados durante la actividad de explotación de cría y levante de cerdos.”

Que, el citado Acto Administrativo de Formulación de Cargos, fue notificado personalmente el día 22 de octubre de 2018.

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES

- De orden constitucional

El régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el Artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso y el derecho a la defensa, en virtud del cual, “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

El debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia son unos mecanismos que tiene todo ciudadano para defenderse de las acciones administrativas y judiciales de las diferentes entidades del Estado y privadas. Es considerado este derecho como parte esencial y fundamental del Estado Social de Derecho y de sostenimiento de la Democracia, porque impide las arbitrariedades de los gobernantes con los ciudadanos.

“Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa,

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.” Sentencia C-025/09, La Sala Plena de la Corte Constitucional Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil nueve (2009).

- De la competencia de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria, la cual ejerce a través de sus autoridades ambientales.

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 establece la naturaleza jurídica de las Corporaciones como entes “...encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrolla Sostenible...”.

Que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, enumera como una de las funciones a cargo de las Corporaciones Autónomas regionales, “ Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados”.

Que de conformidad con el artículo 32 de la precitada Ley, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico es la autoridad ambiental del Departamento del Atlántico.

Lo anterior, en concordancia con el párrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, el cual establece que la autoridad ambiental competente para otorgar o negar la

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria.

Que la potestad que le otorga la Constitución Política al Estado en materia sancionatoria se encuentra limitada por las mismas disposiciones de orden superior que así lo determinan. Dichas restricciones son básicamente el derecho al debido proceso, a la contradicción, a la audiencia y defensa, a la presunción de inocencia, la proscripción general de establecer regímenes de responsabilidad objetiva y la posibilidad de trasladar la carga de la prueba al presunto infractor, aspectos todos que permiten el desarrollo de la potestad sancionatoria de manera transparente, legítima y eficaz.

Que en cuanto hace a la administración, la filiación de su potestad sancionatoria se suele situar en la función de policía que pretende asegurar el orden público en el poder de policía que, con la finalidad de garantizar el orden público, permite regular el ejercicio de las libertades individuales e imponer sanciones orientadas al cumplimiento de las medidas de policía.

Que en cualquier caso, el fundamento de la potestad sancionatoria de la administración, actualmente se encuentra en una pluralidad de disposiciones constitucionales que van desde el señalamiento de los fines del Estado, contemplados en el artículo 20, hasta el establecimiento, en el artículo 209, de los principios que guían la función administrativa y, señaladamente, el de eficacia, pasando por el artículo 29 superior que, al estatuir la aplicación del debido proceso “a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, reconoce, de modo implícito, que la administración está facultada para imponer sanciones.

Ahora bien, en materia ambiental tenemos que la potestad sancionatoria de la administración, se encuentra establecida en el artículo 80 de la Constitución Política, al establecer que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, al igual que deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

De igual forma, el artículo primero de la Ley 1333 de 2009, se establece que la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental está a cargo del Estado y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, entre ellas la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

- **Del periodo probatorio en el proceso sancionatorio ambiental**

Que, desde el punto de vista procedimental, se tiene en cuenta que con base en lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad Ambiental está investida de la facultad para decretar la práctica de las pruebas consideradas de interés para el procedimiento Sancionatorio de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.

La práctica de las pruebas consideradas conducentes, se deben llevar a efecto dentro de los treinta (30) días, término que podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

Que, el tratadista Nattan Nisimblat en su libro “Derecho Probatorio – Principios y Medios de Prueba en Particular Actualizado con la Ley 1395 de 2010 y la Ley 1437 De 2011”, en las páginas 131 y 132, al respecto de los requisitos intrínsecos de la prueba, definió lo siguiente:

“2.3.1.1. Conducencia. La conducencia es la idoneidad del medio de prueba para demostrar lo que se quiere probar y se encuentra determinada por la legislación sustantiva o adjetiva que impone restricciones a la forma como debe celebrarse o probarse un determinado acto jurídico.

2.3.1.2. Pertinencia. La pertinencia demuestra la relación directa entre el hecho alegado y la prueba solicitada. Bien puede ocurrir que una prueba sea conducente para demostrar un hecho determinado, pero que, sin embargo, no guarde ninguna relación con el “tema probatorio”. Son ejemplos de pruebas impertinentes las que tienden a demostrar lo que no está en debate

2.3.1.3. Utilidad. En desarrollo del principio de economía, una prueba será inútil cuando el hecho que se quiere probar con ella se encuentra plenamente demostrado en el proceso, de modo que se torna en innecesaria y aún costosa para el debate procesal. Para que una prueba pueda ser considerada inútil, primero se debe haber establecido su conducencia y pertinencia. En virtud de este principio, serán inútiles las pruebas que tiendan a demostrar notorios, hechos debatidos en otro proceso o hechos legalmente presumidos.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

Que, el Consejo de Estado¹, en providencia del 19 de agosto de 2010, se refirió de la siguiente manera frente a la noción de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad de las pruebas:

“El artículo 168 del C.C.A. señala que, en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 178 del C. de P.C. dispone: “Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”.

De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, se debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. Por esencia, la prueba es un acto procesal que permite llevar al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso.

La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso; La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley.

Que, con base a la anterior definición, es necesario señalar lo que el Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, determina en cuanto a las pruebas:

1. Que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, esto es la necesidad de la prueba (Artículo 164 del C.G.P.)
2. Que sirven como pruebas, la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los

¹ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, CP Hugo Fernando Batidas Barcenás, del 19 de Agosto de 2010, Radicación 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez (Artículo 165 del C.G.P.)

3. Que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba (Artículo 167 del C.G.P.)

4. Que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas (Artículo 168 del C.G.P.)

Desde el punto de vista procedimental se tiene en cuenta, con base en lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, que esta Autoridad Ambiental está investida de la facultad para decretar la práctica de las pruebas consideradas de interés para el presente proceso sancionatorio.

Que el párrafo del artículo de práctica de pruebas citado en el párrafo anterior determinó que:

“Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas”.

Que todos los documentos relacionados con la investigación adelantada, los cuales forman parte de los Expedientes No **1201-125**, se tendrán en cuenta en el presente caso para llegar al convencimiento necesario que permita el respectivo pronunciamiento.

PRESENTACIÓN DE DESCARGOS

Que, en cuanto a los descargos y los términos de Ley para la presentación de los mismos, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.”

Que, el párrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, establece además que: *“Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien lo solicite”*.

Que, la empresa ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- identificada con Nit 890.103.400-5, contaba con un término perentorio de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, para presentar escrito de descargos en contra del Auto 001516 de 2018, por el cual se formuló pliego de cargos.

Así las cosas y una vez verificada la fecha de notificación del Auto 1516 de 2018, que fue el 22 de octubre de 2018, se evidencia que el término para allegar el escrito corrió a partir del día 23 de octubre de 2018, siendo la fecha límite el día 6 de noviembre de 2018 y no se presentaron los descargos correspondientes.

CONSIDERACIONES FINALES DE LA CORPORACIÓN

Que, de conformidad con la normativa, la doctrina y la jurisprudencia señaladas de manera precedente, el tema de prueba está constituido por aquellos hechos que se hacen necesarios probar, es decir, se refiere a los hechos que se deben investigar en cada proceso, para el caso que nos ocupa corresponden a aquellos que llevaron a esta Corporación a tomar la decisión de formular pliego de cargos contra de la empresa ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA-, por presunto incumplimiento de los actos administrativos que había expedido la Corporación para la operación de la Granja Villa Clarita.

Que, revisado la correspondencia de esta Corporación, se verificó que la empresa ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- identificada con Nit 890.103.400-5., NO presentó escrito de descargos contra el Auto No. 1516 de 2018, siendo la fecha máxima el día 23 de octubre de 2018.

Que esta Corporación dentro de esta etapa procesal, podrá ordenar de oficio las pruebas que estime necesarias, conforme al artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, y para el particular, considerará como prueba la siguiente:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

1. Informe Técnico No. 0001012 del 1 de noviembre de 2013, con sus respectivos anexos.

En relación con los medios probatorios documentales que se decretan de oficio y que se incorporan a la presente investigación, cabe resaltar que, conforme a los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad, los mismos están calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de investigación, ya que aportan la información necesaria e idónea para que este despacho llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

Esta autoridad considera que resultan pertinentes en tanto que guardan relación directa con los hechos, habida cuenta que con los mismos se puede evidenciar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de estos. Son a la vez **conducentes** por cuanto guarda debida aptitud o idoneidad legal para acreditar o desvirtuar el cargo formulado, teniendo en cuenta que por este medio probatorio se encuentra consignada la información referente al incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta autoridad ambiental.

Finalmente, el **Informe Técnico No 0001012 del 1 de noviembre de 2013** es **útil y necesario**, en la medida que pueden demostrar el fundamento fáctico contenido en el cargo formulado.

En vista de lo anterior, esta Autoridad Ambiental al encontrar reunidas las condiciones que se deben observar en los diferentes medios probatorios, esto es, conducencia, pertinencia y utilidad, en la parte decisoria de este proveído se procederá a incorporar el material probatorio arriba señalado al presente proceso sancionatorio, con el fin de que dicha documentación se tenga en cuenta a la hora de tomar la decisión de fondo y de esta manera se pueda llegar al convencimiento necesario para adoptar la decisión que en derecho corresponda.

Dadas entonces las anteriores consideraciones y en mérito de lo expuesto se,

DISPONE

PRIMERO: ORDENAR la apertura de la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, iniciado mediante Auto No. 00537 del 14 de agosto de 2014, contra la empresa **ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA-**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

identificada con Nit 890.103.400-5, en calidad de propietaria de la Granja porcícola Villa Clarita, representada legalmente por el señor ALVARO COTES MESTRE o quien hiciere sus veces al momento de la notificación del presente proveído, por un término de treinta (30) días, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO. - El presente término podrá ser prorrogado por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, para lo cual deberá estar soportado en el correspondiente concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los gastos que ocasione la práctica de pruebas serán a cargo de quien las solicite.

SEGUNDO: De oficio, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, incorporar como pruebas dentro del proceso sancionatorio de carácter ambiental, las siguientes por ser pertinentes, conducentes y necesarias, para el esclarecimiento de los hechos:

Incorporar los siguientes documentos obrantes en el expediente:

1. Informe Técnico No. 0001012 del 1 de noviembre de 2013, con sus respectivos anexos.

TERCERO: NOTIFICAR en debida forma a la señor ALVARO COTES MESTRE identificada con cédula de ciudadanía No. 7.475.817, o quien hiciere sus veces al momento de la notificación del presente proveído, en calidad de representante legal de la Sociedad **ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA-**, el contenido del presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, 56 y numeral 1º del artículo 67 de la ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, y demás normas que la complementen, modifiquen o sustituyan.

Para efectos de lo anterior, la notificación del presente se hará al correo electrónico, porcinorte@acondesa.com.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

AUTO No

551

DE 2023

POR EL CUAL SE APERTURA ETAPA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL INICIADO MEDIANTE AUTO 000537 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014 2012, EN CONTRA DE LA EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. – ACONDESA- NIT 890.103.400-5 – GRANJA VILLA CLARITA, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

En caso de imposibilitarse lo anterior se procederá a notificar conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: El expediente 1201-125, estará a disposición del interesado en la oficina de expedientes de esta Corporación de conformidad con inciso 4º del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo NO procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

Dado en Barranquilla a los

22 AGO 2023

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Blandy M. Coll P.
BLEYDY COLL PEÑA

SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL (E)

Exp:1201-125

Elaboró: Julissa Trujillo – Contratista Gestión Ambiental. -

Revisó y Supervisó: Yolanda Sagbini – Profesional especializado Gestión Ambiental. –

Aprobó: María José Mojica- Asesora Externa de Dirección.-